

RELATORÍA JURÍDICA
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Martes 05 de Mayo de 2015

Tope de daño inmaterial para parientes en primer grado de consanguinidad es de 100 salarios: Consejo de Estado

Así lo indica la unificación de jurisprudencia de la providencia 27709 del 2014, en la cual se establecieron topes para resarcir el daño inmaterial, de acuerdo con siete niveles de cercanía entre los demandantes y la víctima directa del perjuicio.

En este caso, aun cuando la reparación moral concedida a la esposa de la víctima, tanto como a sus padres, hijos y hermanos se había dado por fuera de estos límites, solo era viable corregir la otorgada a la cónyuge, pues esta superaba el límite, y no la de los demás accionantes, cuyo monto era inferior.

Lo anterior porque en cumplimiento del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo (CCA) no puede hacerse más gravosa la condena para la entidad demandada, pues se trata del mecanismo de consulta, que debe entenderse siempre a favor de las entidades que no ejercieron defensa de sus intereses.

El daño se originó por un accidente de tránsito en el que concurren la falla del servicio de la administración, por no cumplir con deberes de señalización (artículo 19 de la Ley 105 de 1993) y el hecho de un tercero que excedió el límite de velocidad (artículo 148 del Decreto 1344 de 1970, modificado por el Decreto 1809 de 1990, Código Nacional de Tránsito Terrestre); la condena solo cubre a la primera por ser la única vinculada

(C. P. Ramiro Pazos). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 08001233100019971094901 (27038), 3/5/2015) Noticia generada en May. 5/15 (10:45 a.m.)

Extra - Decretos reglamentarios únicos

Conozca la propuesta de decreto único reglamentario del sector hacienda

El Ministerio de Hacienda acaba de hacer público el proyecto de decreto por medio del cual unificaría las reglas del sector. La propuesta aclara que el Decreto 2555 del 2010 compila las normas en materia financiera, aseguradora y del mercado de valores y por lo tanto ninguna disposición allí contenida sería derogada, ni ha sido compilada en la que sería la norma única.

Igualmente, precisa que los decretos 790 del 2003, 2280 del 2003, 3965 del 2006, 2058 del 2009, 37 del 2015 y 756 del 2000, que se refieren a reglamentación sobre cooperativas que realizan actividad financiera, tampoco se considerarían derogados.

Así, la propuesta se ocuparía del régimen normativo del sector hacienda y crédito público, con temas como operaciones de manejo de la deuda y de crédito público, así como aspectos especiales del endeudamiento de algunas entidades.

En cuanto a tesorería y manejo de recursos, se ocupa de temas como el sistema de cuenta única nacional y el pago de sentencias y conciliaciones mediante bonos.

Por el lado del sistema integrado de información financiera (SIIF), recuerda las características generales, su estructura y la obligatoriedad de su utilización. Otro tema importante tiene que ver con el Frech y el mejoramiento de vivienda con garantía del Fondo Nacional de Garantías, las condiciones de los créditos y la cobertura condicionada a la tasa de interés para créditos individuales de vivienda.

Por último, el ministerio recibirá comentarios hasta el 13 de mayo, a través de los correos: malvarez@minhacienda.gov.co y bgalan@minhacienda.gov.co.

(Minhacienda, Proyecto de norma, 04/30/2015) Noticia generada en Abr. 30/15 (5:00 p.m.)

Daños causados en espectáculos con animales a cargo de privados pueden ser atribuibles a la administración

El Consejo de Estado sostuvo que si el perjuicio está relacionado con la inobservancia de un deber legal que no haya sido atendido por la autoridad respectiva, esta debe hacerse responsable patrimonialmente de la reparación. En este caso, donde el daño se originó por el ataque de un oso a la asistente a un espectáculo circense, la corporación encontró que la administración incurrió en falla del servicio, pues el circo operaba con una licencia cuyo trámite no cumplió con todos los requisitos legales. Esto, dice la Sala, debido a que, en cumplimiento del artículo 15 del Decreto 115 de 1998, el Distrito Capital no podía otorgar la licencia para la realización del espectáculo sin exigir una descripción detallada de aquel y sin indagar expresamente sobre la utilización de animales fieros (M. P. Olga Mérida Valle de la Hoz).

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 25000232600019980190601 (27136), 10/20/2014) Noticia generada en Abr. 30/15 (4:03 p.m.)

Función de fiscalización no faculta a la administración para comisionar la práctica de pruebas en otras jurisdicciones

La función de fiscalización a cargo de la administración tributaria le permite adelantar las investigaciones tendientes a establecer la ocurrencia de hechos generadores de impuestos no declarados, exigir al contribuyente los documentos que registren sus operaciones y ordenar la exhibición y examen parcial de los libros de contabilidad, comprobantes e impuestos.

Sin embargo, esa facultad no implica una autorización para comisionar la práctica de pruebas en otras jurisdicciones, ya sea que se trate de visitas, inspecciones o requerimientos de información, precisó la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

En ese sentido, la sentencia recordó que el principio de inmediación rige dicho procedimiento de fiscalización, de manera que aquel exige la práctica directa de las pruebas, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y el debido proceso.

En el caso analizado, la corporación determinó que la visita realizada por la administración tributaria de Cali a las instalaciones de una empresa ubicadas en Yumbo (Valle) no vulneró sus derechos, pues tenía competencia para ello, independientemente del domicilio principal de la sociedad, dado que esta no tenía sucursal en esa ciudad, mientras que en tal municipio se encontraba la información financiera y contable requerida.

Adicionalmente, advirtió que la contribuyente no demostró el pago del impuesto de industria y comercio sobre ingresos que pretendía deducir como causados fuera de Cali, por ende, debían gravarse en esta ciudad, porque allí presentó la declaración correspondiente (C. P. Jorge Octavio Ramírez). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 76001233100020090055501 (19483), 4/15/2015) Noticia generada en Abr. 27/15 (10:29 a.m.)

En casos de expropiación, la indemnización no comprende daño moral

Así lo sostuvo el Consejo de estado, trayendo a colación lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1074 del 2002. En estos casos, dijo, procede la inclusión del daño emergente que, de acuerdo con el artículo 62 (numeral 6º) de la Ley 388 de 1997, equivale al valor del inmueble establecido por el avalúo comercial.

Para cumplir con el cometido de concretar un valor resarcitorio acorde al valor del inmueble expropiado, el artículo 24 del Decreto 1420 de 1998 establece la necesidad de atender a los parámetros de dicho acto administrativo, fijados en el artículo 21 (numeral 6º). (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 63001233100020070001201, 12/11/2014) Noticia generada en Abr. 27/15 (3:58 p.m.)

Corte Constitucional reitera que requisitos exigidos en concursos de méritos deben ser razonables y objetivos

Cuando un requisito para ingresar a un concurso de méritos no es proporcional ni razonable es ajeno a la Constitución Política, sostuvo la Corte Constitucional en fallo de tutela.

En efecto, los requisitos deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, no pueden implicar discriminaciones injustificadas entre las

personas y, además, deben guardar una relación de proporcionalidad frente a los fines para los cuales se establecen.

Así, cuando se elimina de un concurso a un aspirante no se vulneran derechos fundamentales, siempre y cuando los candidatos se encuentren debidamente informados de lo que se les exigía, el proceso de selección se haya adelantado en igualdad de condiciones y la decisión se haya tomado con base en el cumplimiento de las reglas previamente definidas.

En el caso estudiado, una entidad estatal vulneró los derechos fundamentales de un ciudadano al excluirlo de un concurso de méritos por superar el límite de la edad permitida, al respecto, la Corte consideró que esto se debió a la duración de la convocatoria (19 meses), situación que dependió de circunstancias ajenas a la voluntad del aspirante y por tal motivo la exigencia de un máximo de edad dejó de ser objetiva (M.P María Victoria Calle Correa). Noticia generada en Abr. 27/15 (2:37 p.m.) (Corte Constitucional, Sentencia T-722, 9/16/2014)

LEYES TRIBUTARIAS NO SON RETROACTIVAS

Acuerdo de 2008 que fijó periodicidad anual del ICA en Palmira, solo se podía aplicar a partir del año gravable 2009

“Con el artículo 338 de la Constitución Política se quiso prohibir la aplicación retroactiva de las normas tributarias, entendidas por estas no solo las leyes, ordenanzas y acuerdos, sino cualquiera otra que regule contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado”.

La Corporación explicó que el artículo 50 del Acuerdo 17 de 2008, que reguló la base gravable del impuesto de industria y comercio en el municipio de Palmira, “solo podía tener aplicación a partir del periodo gravable siguiente al de su expedición, es decir, a partir del año gravable 2009, vigencia fiscal 2010, conforme lo establece el artículo 338 de la Constitución Política, y lo corrobora el artículo 443 del Acuerdo 17 de 2008, según el cual dicho estatuto tributario tiene efectos a partir del 1 de enero de 2009”.

Precisó que por el año gravable 2008, vigencia fiscal 2009, los contribuyentes del ICA “estaban obligados a presentar y pagar la declaración del tributo de manera bimestral, pues en dicho periodo gravable aún se encontraba vigente el Acuerdo 083 de 1999. En

consecuencia, la fiscalización y determinación del tributo por dicho periodo gravable debía adelantarse con fundamento en dicho acuerdo”.

Así pues, “el municipio aplicó retroactivamente el Acuerdo 17 de 2008, pues exigió a la actora la presentación y pago de la declaración anual del impuesto de industria y comercio por el periodo gravable 2008, y con posterioridad la modificó, con lo cual desconoció que por ese año gravable la demandante ya había presentado y pagado bimestralmente el impuesto correspondiente, lo que implica un doble pago del tributo”.

Por lo tanto, “la Administración no podía exigir a EPSA, la presentación de la declaración anual de dicho tributo por el año gravable 2008, con base en normas que no eran aplicables al citado periodo gravable, ni modificarle tal declaración mediante la liquidación oficial de revisión que ahora se demanda”.

Consejo de Estado CE-SEC4-EXP2014-N20361 (01833-01) Nulidad-Restab 2014/12/12

Concepto marco de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos

La finalidad de las inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma son una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función.

Concepto Marco. Departamento Administrativo de la Función Pública

Corte Constitucional explica su competencia para modular efectos sobre tutelas ejecutoriadas

En sentencia recientemente publicada, la Corte Constitucional recordó que para garantizar la efectividad del mecanismo de protección consagrado en el artículo 86 de la Constitución y la cosa juzgada constitucional de la que están revestidas las sentencias de tutela, al juez constitucional le está vedada la competencia para conocer de acciones de tutela contra fallos de tutela.

No obstante, precisó que cuando se evidencian situaciones de fraude, a la corporación le corresponde activar los remedios de los que dispone el ordenamiento para impedir que se consumen los efectos de decisiones

judiciales fraudulentas a través de las cuales se pretende el reconocimiento irregular de prestaciones económicas.

Según el alto tribunal, la Corte Constitucional, para el supuesto específico de las sentencias de tutela, tiene la posibilidad de aplicar el precedente establecido en la Sentencia T-218 del 2012, para modular a posteriori las órdenes proferidas en fallos de tutela ya ejecutoriados y que en su momento no fueron seleccionados para revisión.

A su juicio, esta medida representa una excepción que solo el máximo órgano constitucional puede emplear como un remedio constitucional extremo, precisamente cuando ello es imprescindible para corregir y hacer frente a una situación en la que se evidencia un uso abusivo de esta acción constitucional, a través del cual se desvirtúa su razón de ser y se arriesga su efectividad (M.P. María Victoria Calle Correa). (Corte Constitucional, Sentencia T-272, 5/6/2014) Noticia generada en Abr. 28/15 (9:54 a.m.)

Cualquier argumento que ataque las pretensiones de la demanda no siempre es una excepción

Al estar clara la naturaleza de la demanda, el demandado puede advertir la inexistencia del reclamo o precisar, a través de las excepciones, que su exigencia es anticipada, excesiva o ya desapareció.

Además, el contradictor puede informar al juez la ocurrencia de circunstancias novedosas que alteran ciertas pretensiones del demandante, pero esto no significa que aquel pueda formular excepciones en cualquier momento, pues deberá hacerlo en la contestación, si son de mérito, o en escrito separado en el mismo lapso, cuando sean previas, afirmó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En todo caso, no cualquier argumento encaminado a desestimar las pretensiones corresponde estrictamente a una excepción, aunque el demandado lo denomine así, ya que esa calidad proviene del “contenido intrínseco de la gestión defensiva que asuma dicha especie”, aclaró la corporación (M. P. Fernando Giraldo). (Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-11001310302320070060002 (4574), 4/21/2015) Noticia generada en Abr. 27/15 (2:09 p.m.)

Simple suscripción de un convenio de asociación entre entidades públicas y privadas no genera IVA

La suscripción de un convenio de asociación entre entidades públicas y una particular con el propósito de realizar proyectos de construcción de vivienda de interés social no genera el impuesto sobre las ventas, pues no se infiere la prestación de servicios, operaciones de compra y venta ni la importación de bienes gravados, indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La simple asociación de entidades de derecho público y derecho privado no genera una persona jurídica distinta de las asociadas, quienes conservan su autonomía, independencia y facultad de decisión, contratación, funciones, competencias y desarrollo de sus propias actividades, precisó la entidad.

Situación distinta es que, en desarrollo del objeto y de las cláusulas del convenio, se causen hechos generadores, caso en el cual quién actúe como responsable deberá dar aplicación a la normativa sobre el impuesto. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto 300 (6354), 2/26/2015) Noticia generada en Abr. 28/15 (8:28 a.m.)

Pensión de vejez es compatible con la de invalidez de origen profesional

Así lo sentenció la Corte Suprema de Justicia, al precisar que ha sido esa una posición jurisprudencial reiterada, tal cual lo demuestran providencias como la 40560 del 2014.

Indicó que, desde el 2009, la Sala ha sostenido que esa compatibilidad se sustenta en que estos tipos de pensión cubren riesgos diferentes, uno común como la vejez y el restante riesgos propios de la actividad laboral, como lo es la invalidez; esto además de que tienen fuentes de financiación independientes y autónomas y teniendo en cuenta que se reglamentan de manera diferenciada

(M. P. Luis Gabriel Miranda). (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL-2096 (57243), 2/18/2015) Noticia generada en Abr. 28/15 (8:15 a.m.)

Casos en que se configura la temeridad pero no es preciso imponer sanciones al accionante

No basta que exista duplicidad de demandas de tutela para determinar que efectivamente se actuó con temeridad.

Es necesario, tal y como lo ha previsto la jurisprudencia constitucional, distinguir aquellos eventos en los que pese a que se configura la temeridad, no es preciso imponer sanción al accionante, en tanto "el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho.

En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de "improcedencia" de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación no se considera "temeraria" y, por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante.

Magistrada (e) Ponente: MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ. Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015). Sentencia T-057

Que el incumplimiento del abogado no tenga consecuencias negativas en su poderdante no lo exime de responsabilidad disciplinaria

Así, aun cuando sea imposible probar que la cancelación de las audiencias para las cuales fue contratado el abogado haya sido causada por su inasistencia, es palpable la comisión de una falta disciplinaria.

El Consejo Superior de la Judicatura recordó que incumplir las diligencias propias de la actuación profesional constituye una falta descrita en el artículo 37 (numeral 1º) de la Ley 1123 del 2007, luego su desconocimiento es sancionable, independientemente de si generan o no consecuencias negativas dentro del proceso frente al cual se cumple la gestión

(M. P. Pedro Alonso Sanabria). (Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 11001110200020100498401, 1/21/2015) Noticia generada en Abr. 28/15 (12:00 p.m.)

Abogados deben obrar de buena fe en actividades relacionadas con el ejercicio de su profesión

Así lo aseguró la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que la profesión de la abogacía tiene una profunda incidencia social y además una responsabilidad concomitante con la buena marcha de la administración de justicia y con la construcción de un orden justo.

Para la Corporación, los abogados son colaboradores de la justicia y en muchos casos son la vía obligada para ejercer el derecho a acceder a ella, tal como lo indica el artículo 229 de la Constitución Política, y de su buen desempeño depende la realización de la justicia, la convivencia, a través de la resolución judicial y extrajudicial de conflictos y la efectiva protección de los derechos fundamentales.

En el caso concreto, se sancionó a un abogado que presentó dos demandas idénticas, pese a que la primera de ellas se resolviera desfavorablemente, lo que violó el artículo 30 de la Ley 1123 del 2007 (M.P. José Ovidio Claros). (Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 05001110200020110056501(3108A), 1/21/2015) Noticia generada en Abr. 28/15 (8:00 a.m.)

Jueves 07 de Mayo de 2015

Declaración anual de ICA en Cali para 1999, no tiene validez pues declaraciones bimestrales ya habían adquirido firmeza

La Corporación no aplicó los efectos de la sentencia que anuló parcialmente el Acuerdo 32 de 1998 del municipio de Santiago de Cali.

La Corporación analizó si “en virtud de los efectos de la sentencia del 9 de noviembre de 2001, que anuló parcialmente el Acuerdo 32 de 1998, en cuanto dispuso que no era legal exigir la presentación de la declaración bimensual del impuesto de industria y comercio, quedaron sin efecto las declaraciones bimensuales que por el año 1999 presentó el Instituto de Religiosas de San José de Gerona, y, por consecuencia, es válida la declaración anual del impuesto de industria y comercio (1999), que presentó el 31 de mayo de 2002”.

Con fundamento en la sentencia mencionada, “quedaba previsto que la declaración del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santiago de Cali debía presentarse anualmente y liquidarse sobre los ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior”.

El municipio demandado afirmó que “el fallo de nulidad parcial del Acuerdo 32 de 1998 no afectó las declaraciones bimensuales que la parte actora presentó por el impuesto de industria y comercio porque para la fecha en que se expidió el fallo, tales declaraciones ya habían adquirido firmeza”.

La Sala ratificó el argumento expuesto por la entidad. En otro argumento expuesto por la parte actora, indicó que “obró de buena fe y que presentó la declaración anual del impuesto de industria y comercio por el año gravable 1999 porque los Decretos 0125 y 204 de 2001 eran confusos”.

Al respecto, el Alto Tribunal señaló que “el procedimiento tributario para la presentación de las declaraciones anuales en el municipio de Santiago de Cali no era confuso ni se prestó para diversas interpretaciones, pues los Decretos 0125 y 204 de 2002 claramente dispusieron que la declaración anual por los años 1999 y 2000 operaba para los contribuyentes omisos”.

Consejo de Estado CE-SEC4-EXP2015-N19466 (00195-01) Nulidad-
Restab 2015/02/05

LÍNEA JURISPRUDENCIAL

Texto fallo: Al unificar Corte reitera la necesidad de motivar actos de retiro de provisionales en cargos de carrera

La Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró la línea jurisprudencial sentada en la Sentencia SU-556 de 2014, relacionada con los efectos de la nulidad del acto de retiro del servidor público vinculado en provisionalidad en un cargo de carrera, como consecuencia de la ausencia de motivación de dicho auto.

En el presente fallo, la Corte tuvo la posibilidad de reiterar que los servidores públicos que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad, están amparados por una estabilidad laboral relativa y que, por consiguiente, su desvinculación debe producirse mediante un acto motivado, de manera que, cuando ello no ocurre, se desconocen los principios constitucionales de igualdad y del mérito en el acceso de la función pública y se afectan los derechos al debido proceso y a la

estabilidad laboral relativa, razón por la cual cabe ordenar por la vía judicial su reintegro al cargo, con el pago de la respectiva indemnización.

Sin embargo, como lo sostuvo esta Corporación en la Sentencia SU-556 de 2014, la indemnización que en aquellos eventos se reconoce al servidor público debe ajustarse, con el fin de garantizar, por un lado, la protección de los servidores públicos irregularmente desvinculados del cargo, y, evitar, por otra, que en razón del transcurso del tiempo, particularmente cuando dichos servidores han acudido, sin éxito, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la suma a pagar resulte desproporcionada.

CorteConstitucional-SU-2015-N0054 (T-3691582) Sentencia 2015/02/12

Texto conciliado que sale a sanción presidencial del proyecto que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018

Con 58 votos por el sí en Senado y 98 en la Cámara de Representantes, el Congreso aprobó el Proyecto de ley, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país", estimado en \$703,9 billones. La futura ley contiene 267 artículos, entre ellos el artículo para la creación de parques científicos, Tecnológicos y de Innovación; el artículo que unifica en un solo patrimonio autónomo el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y la Unidad de Desarrollo Empresarial; el artículo que crea el Fondo cuenta para atender pasivos pensionales en el sector hotelero.

CongresodelaR-PL-2015-N200C-2015-N138S-IC 2015/05/05

Fijación del término de indemnización de salarios dejados de percibir por desvinculación de funcionarios

El término máximo de indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago excesivo y desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a causa de la desvinculación, y su tope de veinticuatro (24) meses se determina teniendo en cuenta los estándares internacionales y nacionales recogidos en diversos estudios, que consideran como de larga duración el desempleo superior a un año.

Procurador recordó a servidores públicos sus deberes y prohibiciones con ocasión de elecciones de mandatarios territoriales

“Los deberes y prohibiciones que les corresponde observar a los servidores públicos dentro del proceso que se adelanta con ocasión de las elecciones a cargos y corporaciones públicas del orden local y departamental, fueron reiterados por parte del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

A través de la Directiva 004, expedida el pasado 6 de abril, el jefe del Ministerio Público recordó que la Constitución Política prohíbe expresamente a los empleados del Estado tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas (sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio), al tiempo que citó varias normas que reglamentan ampliamente tal prohibición”.

Procuraduría-Comunicado-2015-N0000378 2015/04/24

Atender al público en estado de embriaguez es falta grave: Procuraduría

El Ministerio Público sostuvo que los servidores estatales deben mantener paradigmas de comportamiento superiores a los de los particulares. Así, dice, deben guardar comportamientos públicos meticulosamente cuidadosos.

Con esos argumentos, el organismo de control impuso una sanción de suspensión de 10 meses al inspector de Policía de Yarumal (Antioquia), quien admitió haber consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar las labores de atención en su despacho.

(Procuraduría General de la Nación, Comunicado, 03/03/2015)Noticia generada en Mar. 3/15 (3:39 p.m.)

Publicaciones periodísticas solo representan valor secundario en la acreditación del hecho: Consejo de Estado

Pese a que el alto tribunal ha reconocido que, de acuerdo con el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental, en principio, estos documentos por sí solos únicamente demuestran el registro mediático de los hechos.

Es decir, carecen de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra o describe, a efectos de aportarlo como medio probatorio en un juicio. La sentencia añadió que la eficacia probatoria de la publicación depende de su conexidad y coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente.

De ahí que, individual e independientemente considerada, no puede constituir el único sustento de la decisión del juez, pues aunque se ha admitido el carácter de indicio contingente, tal naturaleza pretende que el fallador no se aparte de un contexto o realidad, pero teniendo en cuenta que debe hacerse una valoración racional, ponderada y conjunta del acervo probatorio, concluyó

(C.P. Sandra Lisset Ibarra). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 25000232500020100049801 (31772013), 2/19/2015) Noticia generada en May. 6/15 (11:20 a.m.)

Aún durante emergencias, carros de bomberos deben respetar límites de velocidad y normas de tránsito

“el comportamiento del conductor del vehículo de bomberos fue imprudente y, por lo mismo, constitutivo de falla en el servicio, en la medida en que conducía a alta velocidad en una carretera del perímetro urbano”.

“Es claro que el cumplimiento de una misión de vital importancia para la sociedad como la de proteger la vida y la salud de las personas mediante la prevención y control de desastres demanda una conducta ágil y una reacción inmediata, acorde con la emergencia presentada. Sin embargo, no le es permitido al cuerpo de bomberos o a cualquier otro equipo de atención o prevención de desastres poner en riesgo a la población con la justificación de la función encomendada, por lo cual debe respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito”.

Por lo tanto, La Corporación consideró procedente la impugnación realizada por el demandante, quien alegaba que el carro de bomberos de su municipio no había respetado los límites de velocidad, provocando así un accidente de tránsito que le causó la muerte a uno de sus familiares y heridas a otros dos, tesis que fue acogida ya que “el comportamiento del conductor del vehículo de bomberos fue imprudente y, por lo mismo, constitutivo de falla en el servicio, en la medida en que conducía a alta velocidad en una carretera del perímetro urbano. Aunque le estaba permitido omitir la señal de alto de la calle 23 (...), esta potestad (...) estaba condicionada al deber de cuidado en el cruce de vías y, en general, a las normas de tránsito vigentes. (...) este exceso de velocidad no le permitió al taxista reaccionar a tiempo para evitar el accidente, máxime si estaba confiado en la prelación en el tránsito (...).

Por lo anterior, se tiene que la conducta de la administración fue la que en mayor medida concretó el riesgo y, por tanto, determinó el daño sufrido por los demandantes”. Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N28764 (01322-01) ARD- 2014/10/09

Estabilidad laboral reforzada para funcionarias cabeza de hogar está prevista para procesos de reestructuración de entidades

Así lo advirtió el Consejo de Estado, que también precisó que las empleadas que quieran hacer efectiva esa protección deben manifestar y probar su condición ante la entidad que se encuentre enfrentando ese trámite de reforma.

Ello porque el artículo 12 de la Ley 790 del 2003 se refiere a la imposibilidad de remoción de este y otro tipo de funcionarios en estado vulnerable en desarrollo del programa de renovación de la administración pública.

En el caso concreto, la entidad empleadora no estaba sometida al citado proceso modificadorio y la actora no había declarado su condición de madre cabeza de hogar (C. P. Sandra Lisset Ibarra). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 05001233100020050143401 (02672014), 2/19/2015) Noticia generada en May. 6/15 (1:38 p.m.)

El despido no es necesariamente una medida sancionatoria

Así lo manifestó la Corte Suprema de Justicia, al desestimar que la terminación del contrato laboral con justa causa exija agotar el procedimiento del Código Disciplinario Único (Ley 734 del 2002).

En ese sentido, indicó cómo desde el 2006 ha venido sosteniendo que el despido por las causales del Decreto 2127 de 1945 no es una medida sancionatoria en estricto sentido y precisó que así lo concluyó la misma Sala en la Sentencia 35766 del 2013 (M. P. Clara Cecilia Dueñas). Noticia generada en May. 5/15 (4:10 p.m.) (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL- 3668 (39546), 3/4/2015)

Impuesto de alumbrado público puede recaudarse en la factura del servicio público o en desprendible separado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la nulidad de los artículos 3 y 7 de la resolución 122 del 2011 expedida por la Creg, que permite a los municipios y distritos recaudar conjuntamente el impuesto de alumbrado público y el valor por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, para lo cual el impuesto debe cobrarse en desprendible separable de la factura del servicio.

La Sala determinó que las normas demandadas no violan el artículo 9º del Decreto 2424 de 2006, y el desprendible, aunque separable, hace parte de la factura y debe contener los requisitos del artículo 7º de la citada resolución, entre otros, el número de la factura correspondiente y el valor a pagar por concepto del impuesto, por tal motivo resulta indiferente si las facturas tienen desprendible separable o no, indicó

(C.P Martha Teresa Briceño). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 11001032700020120002900 (19451), 4/9/2015) Noticia generada en May. 6/15 (11:58 a.m.)

Delimitación de la potestad reglamentaria del presidente de la república

No puede el Presidente de la República recurrir a la potestad reglamentaria para ejercer competencias propias del Legislador, como son las de derogar o interpretar las leyes ni, por tanto, para hacer

expresas por medio de decreto las derogatorias tácitas deducibles de las leyes según lo expuesto en este concepto.

SALA DE CONSULTA y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Augusto Hernández Becerra

Bogotá, D.C., 18 de junio de dos mil catorce (2014) (Levantamiento de Reserva Enero 23 de 2015)

Radicación interna: 2143 Número Único: 11001-03-06-000-2013-000193-00

Señalan alcances de la Sentencia C-103 del 2015, que declaró inconstitucional la función de advertencia

A través de la Circular 59 del pasado 30 de abril, la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá señaló los alcances de la Sentencia C-103 del 2015 de la Corte Constitucional, por la cual se declaró inconstitucional la función de advertencia que tenía la Contraloría General de la República, en el sentido de precisar que la Directiva 02 del 2004 y las circulares 16 del 2008 y 29 del 2010 quedaron sin efecto a partir del pasado 12 de marzo, es decir, el día siguiente a aquel en que el alto tribunal tomó la decisión.

En la Directiva 02, el Alcalde Mayor impartió instrucciones sobre la función de advertencia y recordó el régimen legal relacionado; en la Circular 16 estableció el formato que las entidades y organismos públicos debían tener en cuenta para diligencia la información referente a acciones emprendidas por el sector, acciones por realizar y avances obtenidos, así como el estado actual de los controles, y en la Circular 29 reiteró las obligaciones de remitir respuestas a la Veeduría Distrital, en el marco de las competencias establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993.

(Secretaría General Alcaldía Bogotá, Circular 59, 4/30/2015)

Noticia generada en May. 6/15 (9:48 a.m.)

Martes 12 de Mayo de 2015

Responsabilidad del Estado por lesiones y abusos ocasionados al interior de planteles educativos públicos

Los medios probatorios persuaden a la Sala que la agresión física que recibió la menor, pese a que no dejó secuelas permanentes en su cuerpo; si produjo lesiones de orden psíquico, que comportan necesariamente sufrimiento de orden moral, tanto para la víctima menor de edad, como la de los padres, que deben afrontar la ansiedad y el desasosiego que la niña experimenta como consecuencia de lo sucedido.

La Sala hace énfasis en que el perjuicio que aquí se reconoce es el moral, en el sentido en que lo que se ordena indemnizar es la congoja que la lesión psíquica que sufrió la menor ocasiona en cada uno de los demandantes; y no se está indemnizando la lesión misma, lo que corresponde al concepto de daño salud, respecto del cual se ocupa la Sala más adelante.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA
SUBSECCION C Demandado: MINISTERIO DE EDUCACION Y OTROS
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá,
D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015). Radicación
número: 68001-23-15-000-1999-02617-01(30924)

Servicios médicos que deben prestarse de manera obligatoria a personas víctimas de accidentes de tránsito

El hospital, clínica o centro asistencial público o privado que atienda a una persona víctima de un accidente de tránsito, está en la obligación de brindarle todos los servicios médicos que requiera sin poner ninguna traba administrativa o económica que pueda perjudicar al paciente.

Según la ley y la jurisprudencia de esta Corte, la institución prestadora del servicio de salud (IPS) debe cobrar los costos de la atención prestada directamente al emisor del seguro obligatorio del vehículo (Soat) en caso de que el automotor esté asegurado o a la subcuenta ECAT del Fosyga, cuando el automóvil no cuenta con la póliza o no es identificado.

En caso de que los fondos otorgados por el Soat y el Fosyga se agoten (ochocientos salarios mínimos legales diarios) la entidad no puede dejar

de prestar los servicios o la atención al accidentado en caso de requerirla, ya que esta puede exigir el recobro del excedente a la EPS, EPSS o ARL, dependiendo del tipo de afiliación del paciente en el sistema general de seguridad social en salud o si el accidente se derivó de un riesgo profesional o contra el conductor o propietario del vehículo cuando su responsabilidad haya sido declarada judicialmente. Si no podría vulnerar el derecho fundamental a la salud del accidentado.

Corte Constitucional Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015) Sentencia T-108

Gobierno y servidores públicos acuerdan incremento salarial del 4,66 % para este 2015

De 100 peticiones trabajadas en la mesa general, el Gobierno y los representantes de los sindicatos públicos alcanzaron 73 acuerdos, dentro de los que se destaca un incremento salarial para 2015 del 4, 66 % y del IPC más un punto porcentual para el 2016. Así mismo, el acuerdo incluye un proceso serio de formalización gradual de las entidades del Estado.

Entre ellos se destaca: avances importantes en materias como la formalización laboral y concursos para acceder al empleo público, mejoras con bienestar y capacitación para los servidores.

Por otra parte, el Gobierno se comprometió a impulsar la regulación de la carrera administrativa para contralorías territoriales y para los servidores del sistema de ciencia y tecnología y a revisar las escalas salariales con el fin de contrarrestar las inequidades que se puedan presentar.

También se acordó expedir un decreto extendiendo la bonificación por servicios prestados que se percibe en el nivel nacional para los empleados territoriales a partir del 2016.

Por otra parte, en la subcomisión de concertación del sector público se estudiará un proyecto de ley para fijar los alcances del sindicalismo para el sector público.

Para fortalecer la carrera administrativa se acordó buscar alternativas para proponerle a la Comisión Nacional de Servicio Civil una metodología de priorización de las entidades de la Rama Ejecutiva con

mayores niveles de provisionalidad para estructurar esos concursos. Por último, el documento alcanzado tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016. (Mintrabajo, Documento, 5/11/2015)

Recuerdan criterios para atribuir responsabilidad patrimonial por falla médica

De acuerdo con el Consejo de Estado, la responsabilidad patrimonial por la falla médica involucra tanto el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional de medicina en sus distintos momentos, y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

Según el alto tribunal, debe entenderse que allí se incluyen todas las intervenciones quirúrgicas, así como a todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la intervención del profesional, que operan desde el momento en que la persona asiste o es llevada a un centro médico estatal, actividades que están a cargo del personal paramédico o administrativo.

No obstante, la corporación recordó que los resultados fallidos en la prestación del servicio médico, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento o en la cirugía no constituyen una falla del servicio, cuando esos resultados son atribuibles a causas naturales, como aquéllos eventos en los cuales el curso de la enfermedad no pudo ser interrumpido con la intervención médica, bien porque el organismo del paciente no respondió como era de esperarse a esos tratamientos o porque en ese momento aún no se disponía de los conocimientos y elementos científicos necesarios para encontrar remedio o paliativo para esas enfermedades, o porque esos recursos no están al alcance de las instituciones médicas del Estado.

Pero la responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio médico asistencial, indicó, no se deriva simplemente a partir de la sola constatación de la intervención de la actuación médica, sino que debe acreditarse que en dicha actuación no se observó la *lex artis* y que esa inobservancia fue la causa eficiente del daño

(C.P. Ramiro Pazos Guerrero). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100020020305401 (33756), 12/12/2014) Noticia generada en May. 12/15 (8:38 a.m.)

Recuerdan diferencia entre bienes de uso público y bienes fiscales

La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que en el derecho nacional el sistema de los bienes públicos se encuentra marcado por la división en bienes de uso público, en donde se incluye a aquellos de propiedad pública cuyo uso pertenece generalmente a todos los habitantes, y los bienes fiscales, categoría de naturaleza residual, según la cual todo bien que no es de uso público será, necesariamente, fiscal.

Según el alto tribunal, las diferencias y puntos en común entre una y otra categoría son evidentes. En cuanto a los puntos en común, afirmó que ambas se encuentran sometidas a un régimen de propiedad pública, mientras que en punto a su régimen jurídico los bienes de uso público y los fiscales son imprescriptibles, inalienables y se encuentran sometidos de manera general a un régimen de derecho público en cuanto a su gestión y administración.

Frente a sus diferencias, destacó que los bienes de uso público se caracterizan porque el ordenamiento jurídico los ha puesto a disposición de los particulares para su uso directo, mientras que los bienes fiscales se encuentran, general pero no exclusivamente, destinados para el uso por parte de las entidades públicas.

Así mismo, indicó que el régimen jurídico de los bienes de uso público es de naturaleza constitucional, mientras que el de la mayoría de los bienes que componen la categoría de fiscales es de carácter legal (C.P. Hernán Andrade Rincón). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 47001233100020020044301 (31612), 1/28/2015) Noticia generada en May. 11/15 (4:24 p.m.)

La sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo es cosa juzgada

La cosa juzgada absoluta es aquella que opera a plenitud, precluyendo por completo la posibilidad de interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas.

Así lo recordó el Consejo de Estado al disponer estarse a lo resuelto en la sentencia del 11 de diciembre del 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila en el proceso 41001233100020060059100, en la que se declaró la nulidad del numeral 4.3 del artículo 4º del Acuerdo 020 del 2004, proferido por el Concejo Municipal de Neiva.

En esta norma se encontraba establecido que para las empresas dedicadas a la exploración y explotación petrolera el porcentaje aplicable para el impuesto de alumbrado público sería del 10 % del valor bruto del consumo mensual de energía, incluyendo energía activa, reactiva y máxima, así como del consumo mensual de cualquier tipo de energía.

Según el alto tribunal, sobre el numeral referido operó la cosa juzgada luego de haber sido declarado nulo (C.P. Hugo Fernando Bastidas). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 41001233100020020152501 (19446), 4/23/2015) Noticia generada en May. 11/15 (2:58 p.m.)

La actividad notarial está gravada con el impuesto de industria y comercio

El impuesto de industria y comercio en el Municipio de Medellín grava todas las actividades de servicio en dicho municipio.

Y se entiende por actividad de servicio, en general, toda tarea, labor o trabajo dedicado a satisfacer necesidades de la comunidad, ejecutada por persona natural o jurídica, por sociedad de hecho o cualquier otro sujeto pasivo, sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual, mediante la realización de una o varias de las actividades que enuncian y demás actividades de servicio análogas.

De esta manera, se concluye que la actividad notarial está gravada con ICA, pues se trata de un servicio que se concreta en una obligación de hacer y no existe relación laboral entre el notario y los usuarios.

Además, es una actividad análoga a las enunciadas en las normas locales. Revoca. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Documento disponible al público en mayo de 2015. Temas: Actividad Notarial. Gravámenes. Contraprestación.

Expediente 05001 23 31 000 2012 00378 01 (20754) de 2015
2015-04-09

Corte Constitucional amplía reglas para resarcir daño a provisionales desvinculados sin motivación

La Corte Constitucional ha mantenido invariable la regla conforme con la cual cuando se desvincula sin motivación a un servidor público que se encontraba nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera lo que procede es ordenar la nulidad del acto, como mecanismo para la protección de los derechos a la estabilidad laboral, a la igualdad y al debido proceso.

No obstante, en cuanto hace a las medidas de restablecimiento, en esta oportunidad la corporación amplió las reglas de decisión que se han venido adoptado en la materia, particularmente en lo que tiene que ver con la orden relativa al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y la previsión aplicada de descontar de dicho pago lo que la persona desvinculada hubiese percibido del tesoro público por concepto del desempeño de otros cargos públicos durante el tiempo que estuvo desvinculada.

Así, conforme con la nueva lectura, la regla de decisión se extiende a descontar la remuneración que recibe la persona desvinculada, no solo del tesoro público sino también del sector privado, ya sea como trabajador dependiente o independiente.

Conforme con lo expuesto, indicó que las órdenes que se deben adoptar en los casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera son: el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis meses ni pueda exceder de 24 meses de salario

(M.P. Luis Guillermo Guerrero). (Corte Constitucional, Sentencia SU-054, 2/12/2015)

Noticia generada en May. 11/15 (3:47 p.m.)

Análisis del derecho fundamental de petición y los términos para resolver escritos de petición en materia pensional

La AFP no dio respuesta de fondo a la solicitud a través de la cual pretendía obtener el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. Para resolver, la Sala reiteró:

1. La procedencia de la acción de tutela para resolver conflictos relacionados con el reconocimiento de prestaciones de carácter pensional; y analizó:
 2. El derecho fundamental de petición y los términos para resolver escritos de petición en materia pensional.
 3. Los requisitos para acceder a la pensión de invalidez.
 4. La capacidad laboral paulatina en razón a que es generada por enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas y,
 5. El derecho a la indemnización sustitutiva o devolución de saldos.
- Concede el amparo.

CorteConstitucional-T-2014-N0511 (T-4279508) Sentencia 2014/07/16

Martes 19 de Mayo de 2015

Un acto administrativo no necesariamente debe expedirse por escrito, también puede ser verbal, y es demandable

Prueba de existencia del acto administrativo verbal es el medio técnico en que haya quedado consignada la decisión. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda presentada contra actos administrativos proferidos por la Contraloría General de la República en un proceso de responsabilidad fiscal, en razón a que uno no fue aportado en medio físico y porque respecto del otro el demandante no tenía legitimidad en la causa por activa.

La Sala revoca el auto al constatar que en el expediente obra el DVD donde consta el acto administrativo demandado y porque en el inadmisorio de la demanda no se advirtió como defecto la falta de legitimación en la causa.

“No hay solemnidad que indique que los actos administrativos deban ser plasmados por escrito, pues en algunas ocasiones se profieren de manera verbal, provocando eso sí, efectos jurídicos sobre el administrado, ello implica entonces que se hace necesario romper el paradigma de los medios escritos, pues si bien es “más fácil” probar su existencia, un acto administrativo verbal produce los mismos efectos que uno escrito. Se debe aclarar que para efectos del control legal de los

actos administrativos verbales es indispensable probar su existencia, a través de cualquiera de los medios tecnológicos con los que se cuenta hoy en día. Adicionalmente debe recalcar que la misma ley ordena que esa decisión (la cual es en sí misma un acto administrativo) sea recogida y conservada en un medio técnico, razón por la cual esta Sala considera que cuando se vaya a demandar un acto administrativo de estas características se debe exigir prueba de su existencia, a través del medio técnico donde haya quedado consignada la decisión”.

Consejo de Estado CE-SEC1-EXP2014-N00338-01 Nulidad-Restab
2014/07/31

Supresión del cargo no puede conllevar incorporación, en la nueva planta, a un cargo de inferior salario

Se vulnera el derecho adquirido y el mínimo vital. Se ordena el reconocimiento de la respectiva nivelación salarial. Se trata de establecer la legalidad del Decreto 085 de junio 29 de 1999 “por medio del cual se suprimen unos cargos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Centro de Salud Santa Lucía” expedido por el Alcalde Municipal de Santa Lucía, en cuanto a raíz de la supresión de cargos a que allí se alude y su incorporación en la nueva planta de personal, fue disminuido el salario de la demandante.

“El artículo 158 del Decreto 1572 de 1998 “por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto Ley 1567 de 1998” consagra que para las modificaciones de las plantas de personal se debe entender por empleos equivalentes, aquellos que pertenezcan al mismo nivel jerárquico, tengan igual asignación salarial, funciones iguales o similares y para su desempeño se exijan iguales o similares requisitos de experiencia y estudios, de modo que ante la ausencia de alguno de tales requisitos, se debe entender que el cargo a que alude la nueva planta no es equivalente”.

Consejo de Estado CE-SEC2-EXP2015-N02906-13 (00208-01) Nulidad-Restab 2015/02/19

Los fallos de los jueces deben ajustarse a los parámetros legales o jurisprudenciales: Consejo de Estado

Como una limitante a quienes interponen demandas de nulidad y restablecimiento de derechos, calificó la Sección Quinta del Consejo de Estado, la fórmula según la cual en estos casos, las pretensiones económicas deben estimarse con base en los últimos cuatro meses previos a la presentación de la demanda, independientemente de cual sea el caso y el monto a que se aspire.

El pronunciamiento fue hecho en un fallo de tutela de una funcionaria del municipio de Anapoima con 18 años de vinculación laboral y cobijada con el régimen de cesantías con retroactividad, quien solicitó liquidación de sus cesantías y en respuesta el municipio le informó que las había consignado en anualidades a un fondo de cesantías. Inconforme con la decisión y tras surtir los trámites pertinentes, interpone una acción de tutela en la que informa que su estimación razonada de la cuantía que debía serle cancelada, superaba los 52 millones de pesos, más de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes que estimaba, le debía ser cancelada.

Sin embargo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estudiar la competencia aplicó una fórmula que arrojaba como resultado que el monto no superaría de ninguna manera los nueve (9) millones de pesos y que por tanto lo debía asumir un Juzgado Administrativo del Circuito. La Sala consideró que en este caso se violaron abiertamente los derechos de la tutelante, pues la interpretación de la norma por parte del Tribunal era un planteamiento que no tiene soporte legal o jurisprudencial, por lo que ordenó al Tribunal pronunciarse sobre la admisión de la demanda, antes de cinco días, "bajo parámetros legales o jurisprudencialmente aceptados, los cuales no pueden ser los que expuso en los autos dejados sin efectos por esta sentencia", puntualizó la Sección Quinta.

Consejo de Estado CE-SEC5-EXP2015-N02729-01 AC- 2015/04/20

Corte aclara término de prescripción para que trabajador oficial reclame acreencias laborales

De acuerdo con el párrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, el término prescriptivo para que los trabajadores oficiales reclamen acreencias laborales inicia transcurridos los 90 días que tiene la

administración para poner a órdenes del trabajador los salarios, las prestaciones y las indemnizaciones que se le adeuden.

Según esa norma, los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores solo se consideran suspendidos hasta por el término de 90 días, a partir de la fecha en que se haga efectivo el despido o el retiro.

Con estos argumentos, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó una sentencia de segunda instancia según el cual, en estos casos, la prescripción comienza a contarse desde la fecha en que se extingue la relación laboral.

De manera lógica, precisó el alto tribunal, los términos prescriptivos empiezan a correr desde que las obligaciones se hacen exigibles, es decir, desde que, estando sometidas a plazo o condición, termina aquél o se cumple esta. Así las cosas, el “hito temporal” que debe tenerse en cuenta para que se inicie el conteo de la prescripción solo se presenta a partir del día 91, no antes, concluyó.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL-9641 (43457), jul. 23/14, M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve)

Publicaciones periodísticas solo tienen valor secundario en acreditación de hechos: Consejo de Estado

En sentencia reciente, el Consejo de Estado ratificó que de acuerdo con el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, las publicaciones periodísticas que realice cualquier medio de comunicación pueden considerarse pruebas documentales.

Sin embargo, en principio, estas publicaciones, por sí solas, únicamente demuestran el registro mediático de los hechos, es decir que carecen de la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran o describen, para aportarlo como medio de prueba en un juicio.

En ese sentido, la eficacia probatoria de la publicación depende de su conexidad y coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tal motivo, individual e independientemente considerada, no puede constituir el único sustento de la decisión del juez, pues aunque se ha admitido el carácter de indicio contingente, esa naturaleza pretende que el fallador no se aparte de un contexto o

realidad, teniendo en cuenta que debe hacerse una valoración racional, ponderada y conjunta del acervo probatorio, explicó el alto tribunal.

El caso analizado, el Consejo resolvió la demanda de nulidad presentada por un empleado de libre nombramiento y remoción del Instituto de Seguros de Sociales en contra la resolución que lo declaró insubsistente. El demandante aseguraba que el retiro del servicio se debió a la solicitud pública presentada por el Zar Anticorrupción de la época, quien utilizó varios medios de amplia difusión nacional para hacerla, lo que además truncó sus aspiraciones para ser elegido como presidente de la entidad, ya que se encontraba en la terna conformada para tal fin.

(Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 25000232500020100049801 (31772013), feb. 19/15 C. P. Sandra Lisset Ibarra)

Lunes 25 de Mayo de 2015

La administración, responsable de accidentes de personas al servicio del contratista durante ejecución de las obras

Esto, por el riesgo que se crea para terceros y para quienes realizan la labor directamente por ser una actividad de carácter peligrosa.

Entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el municipio de El Dovio se celebró el convenio interadministrativo 11-0655-0-2000-, cuyo objeto era el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red terciaria a nivel nacional, a través de la generación de empleo temporal mediante el programa "Alianza", dicho convenio tenía como propósito apoyar a las comunidades y hacer que éstas participaran en las obras, mediante la mano de obra no calificada y para tal cometido el municipio del El Dovio se comprometió a vincular al programa "Alianza" a las Juntas de Acción Comunal y/o a los comités viales, los cuales estaban integrados por miembros de la comunidad.

El alcalde del municipio contrató verbalmente a varias personas, entre las cuales se encontraba el señor José Gregorio Rodríguez Gallego, para que realizaran las labores descritas en el convenio; el 26 de marzo de 2001, en instantes en que el señor Rodríguez Gallego extraía una piedra de un barranco que estaba a un costado la carretera, un alud de tierra se le vino encima, como consecuencia del accidente le fue amputada parte de la pierna derecha y debido a la fractura conminuta que padeció en el fémur de su pierna izquierda, durante varios meses tuvo que

utilizar material de osteosíntesis, lo cual, según la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, le causó una pérdida de su capacidad laboral del 53,03%.

“El demandante resultó lesionado en una obra pública que se desarrollaba en virtud de un convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el municipio de El Dovio (...) uno y otro eran guardianes de la actividad de construcción que, por el riesgo que crea para terceros y para quienes la realizan directamente, se ha considerado tradicionalmente una actividad peligrosa.

En cuanto al régimen de responsabilidad, no cabe duda de que tiene carácter objetivo, por lo mismo que está relacionado con el ejercicio de una actividad peligrosa. Se impone al demandante, entonces, la demostración del daño y de la relación de causalidad existente entre éste y el hecho de la administración, realizado por medio del contratista, en desarrollo de una actividad riesgosa. La entidad pública demandada, por su parte, debe probar, para exonerarse, la existencia de una causa extraña, esto es, la existencia de una fuerza mayor”. Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N34276 (00891-01) ARD- 2015/03/25

Audiencia previa de conciliación en lo contencioso administrativo deberá surtirse en procesos iniciados antes del 2 de julio del 2012

Pese a que la disposición del artículo 70 de la Ley 1395 del 2010 fue derogada expresamente por el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011), el Consejo de Estado determinó que en los procesos que hubieran iniciado antes del 2 de julio de 2012, fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, deberá cumplirse con la exigencia de celebración previa de conciliación judicial, antes de conceder el recurso de apelación contra una sentencia de carácter condenatorio.

Lo anterior en virtud del régimen de transición previsto por el legislador en el artículo 308 de la citada norma, que buscó limitar los efectos de las derogatorias establecidas en la ley con el objeto de que el régimen jurídico anterior continuara surtiendo efectos en aquellos procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva codificación.

Adicionalmente, la disposición respeta el espíritu de la norma, pues el nuevo código también contempla la celebración de una vista previa de conciliación, que brinda a las partes inmersas en el conflicto la

oportunidad de que lleguen a un acuerdo más favorable que ponga fin al litigio antes de surtir la segunda instancia, concluyó (C.P. Ramiro Pazos Guerrero). (Consejo de Estado Sección Tercera, Auto 05001233100019990384601 (52200), 5/6/2015) Noticia generada en May. 22/15 (8:36 a. m.)

Publican fallo que avala prohibición de gravar con tributos territoriales actos notariales

La Corte Constitucional publicó el texto de la Sentencia C-260 del 2015, la cual declaró la exequibilidad del parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1579 del 2012, que contiene el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. De acuerdo con la norma acusada, ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepción del impuesto de registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y sus reformas.

Según la providencia, esa disposición no vulnera el artículo 294 de la Carta Política, pues no establece una exención que afecte los tributos de propiedad de los departamentos o municipios, como el impuesto de industria y comercio que deben pagar los notarios, por tanto, el legislador no excedió sus competencias constitucionales, resaltó.

Por el contrario, la norma analizada estableció como supuestos de no sujeción tributaria los actos notariales o de registro, hechos voluntarios que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, lo que implica que los mismos no podrán ser gravados impositivamente a favor de las entidades territoriales, y esto difiere del concepto de beneficio, explicó. Ello significa que dicha prohibición no se refiere al servicio público notarial o de registro, sino a los actos jurídicos que se adelantan ante las autoridades que lo prestan, aclaró el alto tribunal (M. P. Gloria Stella Ortiz). (Corte Constitucional, Sentencia C-260, 5/6/2015) Noticia generada en May. 21/15 (4:30 p. m.)

Notificaciones personal y por correo no son idénticas

El Consejo de Estado recordó que la notificación del emplazamiento para declarar puede realizarse de forma personal o enviando por correo la copia de la providencia o actuación respectiva.

En ese sentido, la corporación reiteró que no es necesario que el envío por correo sea entregado directamente al contribuyente, porque esto

implicaría aceptar que esos dos tipos de notificación son idénticos, lo cual no es cierto.

De hecho, avalar esta postura generaría un alto grado de dificultad en el trámite de las actuaciones administrativas, resaltó la providencia (C. P. Jorge Octavio Ramírez). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 05001233100020020078601 (19858), 5/7/2015) Noticia generada en May. 21/15 (8:00 a. m.)

Auditorías e inspecciones no son per se demostración de subordinación en contratos de prestación de servicios profesionales

A juicio de esta Corporación no son indicadores de subordinación, las cláusulas décimo primera y décimo segunda del contrato de prestación de servicios suscrito por las partes (fl. 21 a 25), tal como lo aduce la censura, pues este tipo de contratos no excluye que el contratante ejerza sobre el contratista auditorías prospectivas o de inspección, como se establece en la primera de las mencionadas estipulaciones, ni que ejerza supervisión y evaluación del cumplimiento contractual, como se pactó en la segunda. Corte Suprema de Justicia.

SALA DE CASACIÓN LABORAL- CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada ponente- Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015).Radicación n.º 45171

Es procedente que a un empleado público se le asignen funciones adicionales a las del manual específico de funciones

“De acuerdo con lo expuesto, se considera procedente que a un empleado público se le asignen funciones adicionales a las establecidas en el manual específico de funciones y de competencias laborales para el cargo del cual es titular, siempre que las funciones que se pretenden asignar, guarden relación con el empleo del cual se es titular, con el fin de no desnaturalizar el empleo”.

DAFP-Concepto-2015-N0067861 2015/04/23

Las funciones de control interno disciplinario deben desarrollarse por empleados de la entidad

“Excepcionalmente, la competencia disciplinaria debe recaer, en primera instancia, en el jefe inmediato del investigado y la segunda instancia corresponderá al superior jerárquico del mismo, en tratándose de entidades con plantas de personal reducidas en las cuales no se amerite la creación de una oficina o la conformación de un grupo formal de trabajo.

Por lo expuesto en criterio de esta dirección Jurídica, las funciones de control interno disciplinario deben ser desarrolladas por empleados de la entidad bajo los parámetros anteriormente citados”.

DAFP-Concepto-2015-N0068001 2015/04/23

Los derechos laborales reclamados por los accionantes prescribieron

La Sala procedió a no casar la sentencia que negó las pretensiones de los actores dirigidas a que se les reliquiden o reajusten el valor de su pensión de jubilación inicial, teniendo en cuenta lo devengado por concepto de prima de vacaciones durante el último año de servicios. Reiterando que la prescripción de la acción de los derechos sociales, por regla general, es constitucional y constituye una garantía a la seguridad jurídica.

Excepcionalmente, se excluye de esta regla la correspondiente al derecho a la pensión en razón de su carácter vitalicio y del estatus de pensionado que adquiere el beneficiario, pero no la de las mesadas que sigue la suerte de todo crédito social y sobre la cual, dicho sea de paso, está de acuerdo el recurrente, según la demostración del cargo.

En forma adicional, cuando se trata de reclamar la inclusión de factores salariales para determinar el monto de la mesada pensional, hay que distinguir el evento de si los factores salariales que se reclaman para efectos pensionales fueron o no pagados por el empleador, y en este último caso si hubo o no reclamación, ya que en el primer caso, esto es que los factores fueron pagados, la acción del pensionado prescribe en tres años a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión; y en el segundo caso, cuando los factores salariales no fueron pagados, el reclamo debe hacerse dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad de estos, porque de lo contrario, si prescribió el derecho a ese pago, igual suerte tiene sobre el reajuste pensional impetrado por esa causa.

No Casó. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Documento disponible al público en mayo de 2015. Temas: Laboral. Casación. Prescripción.

Amplían reglas para resarcir daño a provisionales desvinculados sin motivación

Cabe resaltar que en el presente caso, como ocurrió en los casos de la sentencia SU-556 de 2014, le corresponde a la Corte pronunciarse sobre la situación de aquellos servidores públicos que ejercían cargos de carrera en provisionalidad y fueron despedidos sin motivación, antes de la entrada en vigencia del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, y que, previo a la interposición de la respectiva acción de tutela, promovieron los respectivos procesos contenciosos sin que en ellos les fueran reconocidas sus pretensiones.

Tal precisión resulta de interés, no solo por el hecho de definir el ámbito de aplicación de las medidas tomadas en el presente fallo, sino también, por cuanto que, como lo destacó la Corte en la sentencia SU-556 de 2014, el criterio adoptado en torno a la estabilidad relativa de los funcionarios nombrados en cargos de carrera en provisionalidad, fue acogido por el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, el cual, a su vez, en la actualidad, viene siendo aplicado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el sentido de reconocer el deber de motivar el acto de retiro de los empleados públicos en cargos de carrera ocupados en provisionalidad.

M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Documento disponible al público en mayo de 2015. Temas: Cargos de Carrera Ocupados en Provisionalidad. Despidos sin Motivación. Corte Constitucional- Sentencia SU 054 de 2015

Acción disciplinaria contra abogados cuando hay demora en instaurar la gestión encomendada

Respecto de la conducta enrostrada al profesional del derecho y contemplada en el Artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, que se refiere a la infracción contra la debida diligencia profesional, en relación de progresión, se incurre en esta falta cuando se omite la gestión encomendada, igualmente cuando se demora en instaurarla, o cuando en su curso se quebrantan términos o se pierden oportunidades legales; cuando se desatiende el asunto, se atiende de manera ineficiente o de manera esporádica y, por supuesto, cuando decididamente el asunto se

deja al garete, desprendiéndose definitivamente de las obligaciones profesionales y dejando los intereses confiados sin representación efectiva, reprochándose en el presente caso al litigante investigado “descuidar o abandonar,” el mandato conferido.

Consejo Superior de la Judicatura SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No. 050011102000201200838 01- Bogotá, D. C., 21 de enero de 2015

Reiteran que certificado de disponibilidad presupuestal es un requisito para la ejecución del contrato estatal, no para su validez

La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que comprometer vigencias futuras sin autorización o, lo que es lo mismo, no contar con registro de disponibilidad presupuestal para contratos estatales no constituye causal de nulidad, ya que este es un requisito necesario, únicamente, para su ejecución.

La sentencia recordó que los vicios que afectan la validez del contrato estatal, adicionales a los previstos en el derecho privado, son los dispuestos por el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. De ahí que para el perfeccionamiento del contrato estatal baste con que se llegue a un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y que se eleve a escrito, añadió.

Situación diferente es la que se presenta cuando no se encuentran satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, ya que en ese caso se generan las consecuencias contempladas en el Decreto 111 de 1996, de índole distinta a la extinción del contrato, y que afectan no el acto sino a la persona que incumple la obligación, funcionario que responderá disciplinaria, penal y fiscalmente por dicha conducta (C.P. Olga Mélida Valle).

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 08001233100020010115601 (30685), 4/13/2015)Noticia generada en May. 20/15 (1:40 p. m.)

Disposiciones para la aplicación de la vigencia de la ley 100 de 1993 en el nivel territorial

Respecto de la vigencia de 100 de 1993 en el nivel territorial, el artículo 151 de dicha normatividad establece que el sistema entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995; por consiguiente, sólo las situaciones particulares definidas con anticipación a tal fecha, en principio, deben ser respetadas, en tanto que Constitucional retiró del ordenamiento jurídico el aparte subrayado del artículo 146, que permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social.

A pesar de la decisión de, esta Sala ha concluido con fundamento en el artículo 45 de 270 de 1996, que el aparte declarado inexecutable por Constitucional sí desplegó sus efectos protectores sobre las situaciones pensionales que se consolidaron en el interregno comprendido entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, en tanto que dicho Tribunal no moduló los efectos de su decisión.

Por consiguiente, es dable concluir, que las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial, se deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 citado.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" Actor: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Demandado: Josué Fernando Roncancio Bernal Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil quince (2015). Radicación N°: 25000 23 25 000 2005 06990 03 (4680-13)

Riesgo asegurado en pólizas de seguros de contratos estatales

El riesgo asegurado en esta categoría de seguros, visto de manera general, lo constituye el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del deudor (contratista), quien a su vez es el tomador de la póliza, de modo que el objeto de las obligaciones garantizadas es lo que determina o particulariza el riesgo asegurado.

En el caso de los contratos estatales, la garantía de cumplimiento y, por ende, la póliza de seguro de cumplimiento de contratos estatales debe cobijar todas las obligaciones a cargo del contratista, tal como lo dispone el artículo 25 (numeral 19) de la Ley 80 de 1993; por ende, en una única póliza se contemplan distintos amparos, dependiendo de las

obligaciones y prestaciones emanadas del contrato asegurado (artículo 17 del Decreto Reglamentario 679 de 1993), así: (i) buen manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado, (ii) cumplimiento del contrato, (iii) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (donde se requiera personal para ejecutar las obligaciones), (iv) estabilidad de la obra, (v) calidad del bien o servicio y (vi) correcto funcionamiento de los equipos (en el caso de los suministros, por ejemplo).

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA
SUBSECCION A Actor: COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. –
CONFIANZA- Demandado: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Y OTRO Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015).
Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00874-01-(28278)

Jueves 28 de Mayo de 2015

Los Acuerdos Municipales deben crear un impuesto y no una tasa

Se observó que el Acuerdo 066 de 1997 “Por el cual se establece una tasa a la prestación del servicio de alumbrado público municipal”, por ser contrario a los requerimientos técnicos que debe comportar una tasa y dada la imposibilidad conceptual y real de gravar el servicio de alumbrado público con esta figura tributaria, adolece de una imprecisión técnica que sin embargo se suple teniendo en cuenta el contenido del acto, por cuanto lo que crea es un verdadero impuesto al servicio de alumbrado público.

Revoca. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Documento disponible al público en mayo de 2015. Temas: Alumbrado Público. Tasas. Impuestos. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Expediente 41001 23 31 000 2002 01525 01 (19446) de 2015 - 2015-04-23

La historia clínica estará a disposición de autoridades judiciales y equipos de salud

Aunque en principio el paciente es el único que puede tener acceso a la información contenida en la historia clínica y es él quien puede autorizar a terceros su conocimiento, la ley autoriza expresamente a ciertas personas para acceder a ella, por ejemplo, al equipo de salud y las autoridades judiciales.

Documento disponible al público en mayo de 2015. Temas: Historia Clínica. Autoridades Judiciales. Acceso. Ministerio de Salud y Protección Social- Concepto 23431 de 2015 - 2015-01-09

Realizó: Claudia Salas Martínez
Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Procedimiento Difusión de Información Jurídica
Alcaldía de Santiago de Cali
Teléfono oficina - 57-2 8896744
WhatsApp: 3117704301
Claudia.salas@cali.gov.co